

LA REFORMA AGRARIA Y EL DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL DEL PAIS

Salvador de la Hoz

La Ley de Reforma Agraria, como ustedes saben, fué publicada en la Gaceta Oficial del 5 de Marzo. Es por tanto Ley de la República y los comentarios que en torno a ella se elaboren o expongan, necesariamente tienen que concretarse a advertir lagunas o deficiencias con la finalidad de lograr las modificaciones que se estimen necesarias, o bien, en relación a la forma de su aplicación en la práctica diaria, velando que sus objetivos sean interpretados a cabalidad. Estimamos, de acuerdo con el texto de la Ley, que la realización de la Reforma Agraria debe ser encauzada hacia el desarrollo económico integral del país y sobre ese tema expondremos a ustedes algunas consideraciones, pero brevemente queremos aprovechar la oportunidad para insistir en la urgencia de que sean reformados sus artículos 15 y 17 antes de que se consoliden situaciones antagónicas a los objetivos que persigue la Ley.

Como se recordará, en algunos Distritos y como consecuencia de Decretos por los cuales el Ejecutivo Nacional declaró inalienables las tierras baldías comprendidas en ellos, existían muchos agricultores o criadores que por ese motivo estaban imposibilitados de estabilizar, de legalizar su situación de meros ocupantes. En el Anteproyecto de Ley y con la finalidad de proteger a aquellos que efectivamente habían trabajado, establecióse por el Art. 15 que los que comprobaran ocupación anterior a un año de entrar en vigencia la Ley de Reforma Agraria, tendrían derecho a convertirse en propietarios de esas tierras en una extensión de 100 hectáreas si eran de primera clase de agricultura y hasta de 2.000 hectáreas si eran de ganadería de segunda clase, es decir que no excedieran los límites que la Ley de Tierras Baldías y Ejidos de 1.936, vigente todavía, establece para los ocupantes legales. El Anteproyecto equiparaba, pues, a estos ocupantes a los de las tierras baldías no incursas en los Decretos, acordándoles las mismas ventajas y dentro de los mismos límites. Era lo más que podía hacerse, y por otra parte, se protegían y conservaban las unidades de explotación que hubieren sido desarrolladas dentro de las disposiciones de dicha

por aceptar en principio la sustitución delegando en el Ejecutivo Nacional la aplicación posterior, por Reglamento, del nuevo sistema cuando en base a experiencias se concretara una escala que no extorpeciera las dotaciones a los campesinos sin tierra. En el Congreso, introducido que fué el proyecto de Ley para su discusión, se planteó de nuevo el problema de clasificación de tierras. Se adoptó delegar en el Ejecutivo Nacional la elaboración del respectivo Reglamento -Art. 204-, pero por el 198 y en forma transitoria, se estableció una escala de valores y un criterio para la obtención de la puntuación de esa escala, la cual, de acuerdo con el Art. 29, debía moverse entre los límites máximos de 150 y 5.000 hectáreas para las extensiones inexpropiables de las tierras de propiedad particular, inexpropiabilidad que, por estar sometida a determinadas condiciones en artículos sucesivos de la Ley, tiene carácter de excepción.

Pues bien, pretextando que por "conexidad" debía ser aplicado a las tierras baldías y ejidales el nuevo sistema de clasificación de tierras, concluyeron que las extensiones máximas que la Ley de Tierras Baldías y Ejidos permitía fueran ocupadas y adjudicadas en propiedad, debían también por "conexidad", ser equiparadas a las de tierras inexpropiables de propiedad particular que establece el Art. 29.- Es de elemental lógica que al ser adoptado un nuevo sistema de clasificación, ipso facto entraba a regir para todas las tierras a que se refirieran otros artículos de la Ley, pero sin alterar los límites de extensiones que estuvieren señalados, como era el caso en tierras baldías y ejidales, entre los máximos de 100 de primera clase de agricultura y 2.000 de ganadería de segunda clase. La lectura del Art. 29 permite comprobar más claramente lo arbitrario del razonamiento que condujo a la modificación de los Artículos 16 y 17. Veamos: Art. 29: "Son igualmente inexpropiables los terrenos o fundos cuya extensión no exceda de ciento cincuenta (150) hectáreas de primera clase o sus equivalencias en tierras de otras calidades según lo que al efecto se establezca en el Reglamento. Las equivalencias a que se refiere este artículo estarán comprendidas entre ciento cincuenta y cinco mil hectáreas". Es decir, que el

nuevo sistema de clasificación se emplearía para determinar las diversas extensiones EQUIVALENTES a 150 hectáreas de primera clase sin sobrepasar las 5.000 de ínfima calidad, por lo que por "conexidad" simplemente se tenía que modificar la redacción de los textos de los artículos 16 y 17 sustituyendo respectivamente la referencia "los límites establecidos en el Art. 28 de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos", por la siguiente redacción: "100 hectáreas de primera clase o sus equivalencias de otras calidades hasta 2.000 hectáreas", conservando igual el resto del texto de esos artículos.

Una duda surgida en el proceso de discusión quien sabe si favoreció que fuera aprobada la modificación sin mayor atención. Estaba facultado el Congreso para aprobar un nuevo artículo sin el previo requisito de las tres discusiones reglamentarias? Designada una Comisión bicameral al efecto, ésta se pronunció por la afirmativa, pero asimismo, con mucha ligereza y sin entrar a considerar el fondo, recomendó fuera aprobado el texto modificado de los Arts. 16 y 17. Esa recomendación fue decisiva. Esa Comisión tiene pues su parte de responsabilidad en este intríngulis y en las nefastas consecuencias que involucra.

Por juzgar que salvo la minoría de interesados en el alegre reparto de baldíos y ejidos, la mayoría de los venezolanos está en desacuerdo con la comentada modificación, se nos ocurre sugerir que los aquí reunidos -aunque ello no se acostumbra- aprobemos que esta Asociación gestione con Diputados y Senadores la introducción en una u otra Cámara de un proyecto de reforma a los artículos 16 y 17 de la Ley de Reforma Agraria en el sentido de que sean repuestos los límites máximos de 100 y 2.000 hectáreas a las extensiones de baldíos y tierras ejidales a que se contraen esos artículos.

Y planteada esta sugerencia que rogamos al Presidente de Debates someter a ustedes al final de esta exposición, entremos en materia.

A pesar de los desajustes que en el último año han aflorado en forma espectacular en la estructura económica del país, se persiste en querer ignorar las cau -

sas profundas que los han motivado. No se quiere reconocer que el desarrollo económico es un proceso que para avanzar tiene que partir de bases elementales y en coordinación precisa los factores que lo determinan. No se toma en cuenta la historia ni la experiencia de países similares al nuestro. Se olvida que a pesar de haber nos constituido en República independiente hace 130 años y de que solo en petróleo han sido extraídos del sub-suelo más de 75 mil millones de bolívares, aún no ha sido posible construir una economía propia e independiente y la mayoría de nuestra población continúa viviendo en la miseria, improductiva; que dejamos de ser colonia de España para, tras un paréntesis de un siglo de estancamiento económico y político, pasar gradualmente a la situación de país dependiente de truts internacionales, principalmente yanquis. Hoy, como en 1.810, tenemos que enfrentarnos a la conquista de nuestra independencia. Para lograrlo no hay otro camino que comenzar por realizar lo que en aquel entonces no realizaron nuestros abuelos. Es falso que los desajustes económicos y financieros que hoy vive el país tengan su origen en los "10 años de tiranía perejimenista" como se quiere hacer creer para ocultar la responsabilidad que en el caos creado corresponde a los Ministros de Hacienda que desde el 23 de Enero de 1.958 han representado en el Gobierno a los sectores más ligados a los intereses extranjeros. Esos "10 años de tiranía", como la escasa producción nacional, el desempleo, la incertidumbre, la paralización de actividades, los "25 años de Gómez", y cientos de otras calamidades no han sido otra cosa que consecuencias directas de una estructura económica caracterizada por la pervivencia de la gran propiedad latifundista, las relaciones de producción que a ella son congénitas y la mediación en que el capital extranjero ha mantenido a nuestro país.

La estructura agraria en la que se basaba el sistema colonial, no sufrió con la República transformación de fondo. Cambiaron de dueños los latifundios y muchos de los que habían ascendido a altos rangos militares durante las guerras de independencia se convirtieron en grandes propietarios de tierras. Las plantaciones de cacao y las de café que apenas se habían iniciado, continuaron siendo trabajadas por esclavos.

vos. De una población de 800.000 habitantes, de la cual 12.000 blancos europeos y 200.000 blancos criollos, 52.000 eran esclavos negros. El resto se distribuía en - 120.000 indios y 406.000 mulatos, zambos, mestizos. En 1.830 las exportaciones totales (café, cacao, azúcar, algodón, añil, tabaco, ganado vacuno) tuvieron un valor de 8.600.000.00 bolívares y se importó por valor de 8.100.000.00.- De café se exportaron 3.610.000 Kls. y de cacao 2.280.000.- Pero como los esclavos no esperaron su liberación "legal", sino que se la tomaron por sí mismos escapando a las montañas y lugares alejados del país, las haciendas se quedaron sin mano de obra que las trabajara, por lo que sus propietarios tuvieron que introducir nuevas relaciones de producción. Entre ellas la más importante la "medianería", que consistía en entregar un lote de montaña al campesino para que lo talara y sembrara de café o cacao, con la condición de que al estar las matas en producción, la mitad correspondía al "medianero", pero obligado a venderla al propietario de la tierra tan pronto éste lo requiriera. En la "pulpería" de la hacienda se le abría crédito al "medianero" y mediante sumas amañadas, mucho antes de que las matas estuvieran en producción, ya debía más de su valor. Esas deudas se heredaban de padres a hijos y mientras no fueran pagadas no podían los deudores ausentarse a otros lugares. Además, tenían que trabajar en las diversas actividades de la hacienda por míseros salarios que les eran pagados con fichas solo cambiables en la respectiva "pulpería". Todavía en 1.936 existían esas fichas, a pesar de su prohibición desde tiempos de Guzmán Blanco y en el Zulia se compraban y vendían indígenas para los trabajos agrícolas. Esas relaciones de producción, como otras, tales la aparcería, el arrendamiento, etc. expresaron la transición de la economía esclavista a la economía semi-feudal que predominó hasta muy reciente época y que con relación a la esclavitud favoreció sin embargo cierto aumento en la productividad del trabajo, como puede apreciarse en el volumen del comercio exterior. En 1.854, año de la abolición "legal" de la esclavitud, las exportaciones de café habían quintuplicado (16.360.000 Kls.) y las del cacao doblado (3.900.000 Kls.).- El valor de las exportaciones montó a 34

millones y el de las importaciones a 31 millones. En 1884/85 las exportaciones de café alcanzaron los 40 millones de kilos y las de cacao 6.700.000 Kls., siendo el valor de las exportaciones, excluido el oro, de 53 y medio millones y el de las importaciones de 58.710.238.- Es de advertir que desde el año 67 se estaban explotando las minas de oro, cuyo valor de exportación sumado hasta el año 84/85 fué de 150 millones de bolívares, "prosperidad" que aprovechó Guzmán Blanco para "modernizar" a Caracas (el Capitolio lo construyó en 114 días), para atraer a inversionistas extranjeros y fletar empréstitos exteriores con cuyo manejo se enriquecieron sectores de las clases gobernantes. El haber Guzmán Blanco decapitado el movimiento de transformación de la estructura agraria latente en las guerras federales, impidió que el desarrollo económico general adquiriera impulso, a lo que contribuyó agravando la situación, por otra parte, la instalación en el país de grandes casas comerciales extranjeras. Estas firmas al convertirse en banqueros de los grandes hacendados y ganaderos a quienes adquirían sus cosechas mediante suministros en su mayor parte en artículos importados y locales para que surtieran sus "pulperías", no sólo monopolizaron las exportaciones de los principales frutos, sino que por pagar precios inferiores a los del mercado exterior y cobrar los artículos manufacturados a altos precios, realizaban jugosas utilidades que remitían a las casas matrices, succionando así al país la poca riqueza que se producía. A este respecto es muy ilustrativo lo que el Ministro de Fomento para el año 67-68 expresaba en su Memoria: "Nadie ignora que los venezolanos por punto general carecen de capitales circulantes. La agricultura, por ejemplo, en frutos mayores, depende enteramente del comercio extranjero, de él recibe con elebado interés los fondos que ha menester para la limpia de las haciendas, recolección de las cosechas y sustento diario de las familias. Por consiguiente, el agricultor se encuentra forzosamente sometido a la Ley del prestador no sólo en cuanto a la utilidad o precio del dinero, sino con respecto del valor mismo de los frutos. Si al cambiarse éstos en país extraño, se obtiene alguna ganancia, de seguro que lla no cede en provecho del productor. Apenas ha

brá algún propietario en aptitud de sacudir la tutela, mandando él mismo a otra parte las producciones de su finca. Una cosa parecida tiene efecto con las demás producciones. Y he aquí otra de las causas del malestar de tantos cultivadores" (1). No obstante tan dramática apreciación, las soluciones que se plantearon fueron las mismas que hoy propone la Cámara de Comercio de Caracas como "novedades": inmigración y organización de colonias. Se fundaron dos colonias, una en Altigracia de Orituco a la que bautizaron "Guzmán Blanco" y otra en Araira, entre Guatire y Caucagua, la Colonia Bolívar, en la que se llegó a cultivar hasta 2.000 hectáreas.

Guerras civiles, disputas de caudillos entre sí por el control del poder, Congresos, elecciones, aclamaciones.... y Juan Vicente Gómez, representante máximo del latifundismo, se adueñó del poder en 1909. Para 1.917/18, año en que comienza la era del petróleo, las exportaciones, excluido éste, montaron a 108 millones y se importó por valor de 90 millones, última Balanza Comercial con saldo favorable. El volumen de exportación de café después de haber doblado con respecto a 1884/85, había comenzado de nuevo a descender. El cacao triplicó (20 millones de kilos). Ese año se realizó la primera exportación de petróleo: 21 mil toneladas métricas por valor de 899.000 bolívares y desde entonces, a medida que la extracción de petróleo aumentaba, aumentaron las importaciones con el consiguiente crecimiento de los saldos negativos en la Balanza Comercial. En 1.926 las exportaciones, excluido el petróleo, montaron a 144 millones y las importaciones a 358 millones, siendo el saldo desfavorable de 214 millones. En 1.936 se exportó excluido el petróleo, por valor de 104 millones y se importó por valor de 278 millones. En ese año las compañías petroleras desencadenaron una campaña de prensa en la que se sugería la conveniencia de la baja del bolívar, lo que dió motivo a la pronta y categórica declaración de los Ministros de Fomento y Hacienda en el sentido de que nuestro bolívar había de ser mantenido firmemente y que el contenido oro de nuestra unidad monetaria seguiría siendo el determinado por la Ley de Moneda de 1.918, o sea, de 0,290323 gramos de oro fino.

El hecho de que la explotación del petróleo en lugar de ser realizada directa-

mente por nacionales, lo fuera por trusts internacionales tenía que originar en el país, como en efecto originó, la coexistencia de dos economías: la petrolera cada vez más dependiente de fuerzas extrañas, y la propiamente nacional, entorpecida en su normal desarrollo tanto más profundamente cuanto que contra la distorsión ocasionada por esa coexistencia no se tomaban medidas para liquidar la pervivencia de la estructura agraria semifeudal y para impulsar un desarrollo autónomo que aprovechara al máximo lo que se percibía por la explotación del petróleo. Independientemente de la concepción general que Adriani tuviera del problema, con su conocida consigna "sembrar el petróleo" previó las consecuencias desastrosas de la coexistencia y señaló la forma de aminorarlas o sortearlas. Desde 1.936 se ha estado hablando de "sembrar el petróleo" y durante la Segunda Guerra Mundial hasta se iniciaron gestiones en ese sentido que quedaron interrumpidas por el golpe de Octubre de 1.945. - Pero en general y por la forma como ha sido sembrado el petróleo, tenemos al país atiborrado de automóviles, neveras, tocadiscos, torres de 30 pisos; de especuladores, "Contratistas", burócratas y lo más grave, un creciente número de desempleados en los campos y ciudades. Esta generalización para algunos seguramente exagerada, no niega que a pesar de todo en reducidas zonas agrícolas hayan tenido lugar determinados desarrollos e incluso, en lo industrial se hayan establecido empresas nacionales, pero no se podrá negar, que en ambos casos a costa de inversiones superiores a las necesarias y sin la debida estabilidad orgánica como lo han puesto de manifiesto las quiebras y cierres de talleres desde fines del año pasado y en lo que va de éste.

Desde que se inició la explotación del petróleo, la estructura agraria atrasada comenzó a resquebrajarse en sus bases, o sea, en las relaciones de producción que la sustentaban. Los latifundistas ya no continuarían contando con abundante mano de obra semi-feudal, pues tanto las explotaciones petroleras como los servicios que se improvisaban en las zonas donde éstas tenían lugar, atraerían grandes contingentes de campesinos. De igual manera afluirían hacia las ciudades porque el Estado, al contar con mayores ingresos, ampliaría su propio aparato y dedicaría sumas cada vez más importan

tes a la construcción de obras públicas. No es la ocasión para profundizar en este complejo proceso de cuya existencia y alcance ha dado testimonio el adolorido lamento de los latifundistas: "el petróleo es la causa del deterioro de la producción agropecuaria, de que hayamos tenido que abandonar las haciendas de café y cacao, los hatos y las actividades del campo". Y no podía ocurrir de otra manera, pues los siervos del campo, cuya explotación exhaustiva aseguraba la renta de los grandes propietarios de tierra, habían iniciado su éxodo hacia lugares en los que creían iban a encontrar una mayor remuneración por su trabajo y a escapar de la tutela y vejámenes que les infligían sus seculares explotadores. Con la muerte de Gómez comenzaron también a desaparecer el "chácharo" y el Jefe Civil que retenían a los campesinos por la fuerza en los latifundios y, con ellos, los mejores aliados de los latifundistas; el trabajo forzado de las carreteras, las reclutas, las coacciones, etc. atrocidades que simulan olvidar los que aún añoran las "productivas haciendas" del pasado reciente.

La desaparición de Gómez, históricamente y por la incidencia de la explotación petrolera en las relaciones de producción prevalecientes en el campo, debía abrir paso al sistema de asalariado, de relaciones capitalistas, pero ello no ocurrió porque el desarrollo en escala nacional de esas relaciones, por su incompatibilidad con la gran propiedad territorial, implicaba la liquidación de ésta. Y ha sido justamente esa contradicción principal lo que ha caracterizado y agudizado las contradicciones secundarias en que se ha estado debatiendo la situación del país desde 1.936.- Las plantaciones de café y cacao, los hatos extensivos, como explotaciones semif feudales, estaban condenadas a desaparecer y, por tanto, para la mayoría de la población campesina ocupada en ellos, la impostergable necesidad de que fueran creadas fuentes de trabajo acordes con las nuevas relaciones de producción. En poco más de un siglo nuestro país recorría etapas en su desarrollo económico y social que llevaron de cenizas de siglos a otros pueblos. Lo que no debe extrañar si tomamos en cuenta la interdependencia entre naciones impuesta por el sistema capitalista en su violenta expansión. Lo anormal fué que liquidado en Europa desde hacía siglos el sistema esclavista, españo

les, franceses, ingleses, portugueses lo implantaran en la colonización de nuestra América e importaran esclavos de Africa en momentos en que en el seno mismo de la estructura feudal europea se estaban creando las condiciones para el pase a la estructura capitalista. La Revolución Industrial y su proyección en el mundo, las revoluciones social-políticas, principalmente la Revolución Francesa, al liquidar el sistema feudal y las relaciones de producción que obstaculizaban e impedían el avance de la sociedad, creó las bases para el desarrollo y apogeo de las hoy Potencias Imperialistas. Entre nosotros, para concretizar, si la explotación del petróleo incidió en las relaciones de producción semi-feudales, haciendo ya imposible su pervivencia, por el hecho de estar ella controlada por intereses extranjeros, por formar parte de una economía exterior de la cual es apéndice, en lugar de liberar las fuerzas económicas nacionales, las entrabó, mediatizando, amoldando el desarrollo interno nacional a sus propios intereses colonizadores. La Revolución Industrial en Europa liquidó al feudalismo. La penetración imperialista -las firmas comerciales extranjeras, las compañías concesionarias de petróleo y de hierro- reforzó en el poder a los grandes propietarios de tierra, auspició a los grandes importadores, condenó a la mayoría de la población a la improductividad, obstaculizando así el desarrollo económico propio e independiente de nuestro país. El ingreso petrolero por la forma en que ha sido distribuido ha incrementado las importaciones y en lugar de haberse acumulado ese ingreso en el interior como capital nacional, ha escapado al exterior arrastrando consigo la demás riqueza producida por los obreros y campesinos venezolanos. Somos un país inmesamente rico en recursos naturales no renovables, y sin embargo, la mayoría de la población vive en la miseria, improductiva; se acentúa el éxodo campesino; el desarrollo industrial, no obstante los subsidios, créditos y protecciones aduanales, se estrella por ausencia de un mercado interior que absorbe la producción.

La Balanza Comercial ha venido cerrándose con saldos desfavorables cada vez mayores y la acumulación de éstos, al producirse o ser provocada la "fuga de divisas" el año pasado, determinó que las Reservas Internacionales bajaran bruscamen

te poniendo en peligro la estabilidad de la moneda. Asimismo, que se viniera al suelo la artificial "prosperidad" de los últimos años en que medró la más variada y vergonzosa especulación. Ha contribuido a agravar la situación en que se debate el país, la "técnica" importada de los Presupuestos deficitarios y de los empréstitos exteriores. El problema no es por tanto de que "haya disminuido la propensión a invertir", lo que es una consecuencia y no una causa. Se trata de que si continuamos por el camino que vamos recorriendo, seremos convertidos en la más perfeccionada colonia del imperialismo yanqui, cuando esa catástrofe podemos evitarla si son volcados todos los recursos de que disponemos y todas las energías de que seamos capaces en la construcción de una economía propia e independiente. Para alcanzar ese fin la base elemental, imprescindible es la realización de una profunda y popular Reforma Agraria, coordinada, sincronizada con todas las iniciativas y planes de desarrollo industrial que el Estado debe impulsar.

Algunas cifras explican por sí solas la gravedad de la actual situación y de los "desajustes" y "pánicos" que han mantenido en vilo y preocupación a la opinión pública desde mediados del año pasado:

BALANZA COMERCIAL

Año	Exportaciones: (Excluido petróleo y hierro)	Importaciones:	Saldos:
1. 915	Es. 108.000.000	90.557.963	18.542.037
1. 926	" 144.636.789	358.458.313	213.827.524
1. 952	" 166.000.000	2.420.000.000	2.254.000.000
1. 958	" 288.000.000	4.783.000.000	4.495.000.000

Cómo -se preguntará- esos saldos desfavorables han sido cubiertos, con qué hemos pagado en el exterior tan desmesuradas importaciones? Ustedes saben que por ser explotado y exportado el petróleo por trusts extranjeros, del valor de esas exportaciones no regresa al país sino una parte, aquella que las compañías destinan para el pago de salarios, impuestos, gastos de administración y para comprarnos el royalty. La otra parte la retienen en el exterior y con ella pagan dividendos a sus accionistas extranjeros que viven en el extranjero, los impuestos en sus países de origen, etc. En 1958,

por ejemplo, de los 7.553 millones de bolívares a que montaron las exportaciones de petróleo, regresaron al país solo 3.856 millones, es decir, que la diferencia, 3.697 millones fué la contribución de Venezuela al enriquecimiento de países todo-poderosos. Con la parte que regresa al país en forma de divisas importadas por las compañías (los pagos en el interior son hechos en bolívares) y que venden al Banco Central, se venían cubriendo hasta hace pocos años los saldos desfavorables. Pero como las importaciones continuaron aumentando, ya esas divisas no fueron suficientes. Veamos:

	1.948 (En millones de bolívares)	1.955	1.958
Equivalente de divisas importadas por compañías petroleras,	2.302	2.509	3.856
Exportaciones excluido petróleo y hierro.	95	166	288
	<u>2.397</u>	<u>2.675</u>	<u>4.154</u>
Importaciones.	<u>1.937</u>	<u>2.959</u>	<u>4.783</u>
Saldos:	460 -	284 -	629

Para cubrir ese creciente saldo desfavorable se recurrió a las otras divisas que entraban al país en forma de capital privado de inversión, el que al ser reexportado por sus dueños necesariamente tenía que suplirse con divisas de las Reservas Internacionales. Fué por lo que desde mediados de 1.958 dichas Reservas comenzaron a descender precipitadamente por no haber sido establecido el control de divisas. Los peculadores y los "acreedores heredados" estuvieron en libertad de sacar al extranjero el fruto de sus robos y de las jugosas comisiones obtenidas durante la tiranía. El descenso de las Reservas ha puesto en evidencia lo deleznable de las bases de nuestra economía y ha precipitado la crisis o desajustes, entre cuyas consecuencias, la desconfianza en la solidez de nuestra moneda por la disminución del respaldo oro que la garantiza.

En efecto, para Noviembre de 1.959 las Reservas Internacionales habían descendido de 4.246 millones de bolívares a que montaban el 31 de Diciembre 1.957 a 2.113 millones, es decir, que en los años 58 y 59 escaparon del país 587 millones de dólares de capital nacional. Para el 31 de Marzo, estaban ya en 1.583 millones de bolívares. A su vez las Reservas del Tesoro que para el 31 de Diciembre del 57 montaban a 2.351 mi

llones, para el 31 de Marzo de este año habían descendido a 152 millones de bolívares. Catástrofe ésta a que ha conducido al país la pervivencia del régimen de propiedad latifundista, la penetración imperialista y la acción de quienes se han empeñado en favorecer los intereses extranjeros en detrimento de la construcción de una economía propia, en detrimento de los intereses permanentes de la Nación.

Independientemente de los postulados de Justicia Social, de la consecuente satisfacción a los campesinos de su ancestral reivindicación de tierras, debemos plantearnos que mientras exista una masa mayoritaria de la población, parcial o completamente improductiva, no puede estructurarse ningún desarrollo económico nacional, porque las industrias para prosperar requieren consumidores que adquieran sus artículos en el interior mismo del país. La incorporación de esa mayoría de la población al proceso de la producción, no sólo la liberará de la extorsión de que es víctima y mejorará sus condiciones de vida, sino que al aumentar su capacidad adquisitiva de artículos manufacturados, la producción artesanal e industrial recibirán un franco impulso. Se preguntará el por qué las importaciones son cuantiosas no obstante esa gran masa improductiva. Precisamente ello es uno de los exponentes de la anormalidad de nuestra estructura económica, y se explica porque las importaciones son diversificadas, es decir, que el volumen de importación de cada artículo en particular es determinado por las necesidades de una minoría de la población, la que a través del gasto público y de la desigual distribución del ingreso que el país percibe por la explotación del petróleo, cuenta con medios para adquirirlo. La gran mayoría de la población permanece al margen de esas importaciones: hambrienta, desnuda, sin medicinas. Y es porque el número de los consumidores de un artículo determinado es reducido, que las industrias que se establecen, nacionales y extranjeras, son protegidas por el Estado, mediante grandes erogaciones y no solo debido a la competencia que puedan hacerle artículos importados similares, sino también como medio de contrarrestar el alto costo por unidad que determina lo reducido de la producción. Es un círculo vicioso del cual se han aprovechado comerciantes importadores y pseudo-industriales para enriquecerse especulando con

los precios cada vez más altos que hacen pagar a los consumidores.

La incorporación de la gran masa campesina al proceso de la producción no sólo aportaría las ventajas anotadas: incremento de la producción, satisfacción de las necesidades alimenticias de esa población y aumento de su capacidad para adquirir artículos manufacturados, sino también la de reducir y llegar a eliminar la importación de alimentos y de otros artículos. Los millones que hoy se gastan en el exterior en esas adquisiciones circularían entonces en el país y se acumularía, lo que no ocurre hoy, capital nacional con el cual impulsar el desarrollo económico general. Las economías nacionales se incrementan -aunque sostengan lo contrario los "técnicos importados" - cuando como consecuencia del intercambio de los artículos producidos por los integrantes de la sociedad en cuestión, se acumula capital nacional. El capital privado extranjero, por el contrario, empobrece al país donde se invierte porque succiona y exporta la riqueza que se produzca. Qué ha quedado en el país de los 75.000 millones de bolívares que las compañías petroleras han extraído y exportado en los 40 años que llevan operando? Los países occidentales industrializados pasaron por ese elemental intercambio de productos hasta que saturados sus respectivos mercados internos, tuvieron que buscar mercados exteriores a su producción, para asegurar el ritmo de crecimiento requerido por el desarrollo capitalista. Asimismo, acumulado que fue más del capital necesario para garantizar su propio desarrollo, comenzaron a exportar capital transformándose en potencias imperialistas aunque para alcanzar las magnitudes que hoy tienen sojuzgadas por la fuerza, reduciéndolos a mercados de consumo de sus excedentes y a productores de materias primas a bajo costo, a los pueblos y naciones llamados subdesarrollados, Venezuela entre ellos.

El hecho de que los países sub-desarrollados para construir sus economías propias deban partir de la base, de la realización de la Reforma Agraria, la creación del mercado interior, etc. no quiere decir que tengan que llenar idénticas condiciones y recorrer igual tiempo a los empleados por los países actualmente industrializados. - Por una parte los adelantos técnicos y experiencias alcanzados por tales países son ya

patrimonio universal y, por la otra, el capital que no se ha podido acumular por las causas comentadas anteriormente y que es imprescindible para impulsar el desarrollo económico, puede obtenerse con la explotación y aprovechamiento directo por el Estado de los recursos naturales no renovables, por medio de empréstitos exteriores para su inversión reproductiva y con la coordinación de ambas fuentes de recursos. Nuestro país, a tal efecto, está colocado en situación privilegiada por disponer de enormes ingresos nacionales en relación a su pequeña población, lo que le permitiría, si fueran reducidos al mínimo los gastos burocráticos, disponer de recursos suficientes que además podrían ser aumentados con la explotación directa del petróleo, del gas, del hierro. Incluso podría recurrirse al empréstito exterior para el financiamiento de algunas industrias básicas, para la construcción de la red ferroviaria. En todo caso, la realización de la Reforma Agraria, el impulso al desarrollo industrial y la sincronización de ambas acciones tienen que estar encomendadas al Estado, pues por la magnitud nacional de las mismas y de los capitales requeridos, escapan al limitado radio de acción de la "iniciativa privada". Los grupos o sectores privados, por su composición de intereses, persiguen un lucro inmediato y personal, a más de la influencia que sobre ellos ejercen los consorcios extranjeros con inversiones en el país, lucro antagónico a la finalidad mediata y colectiva sobre la que descansa para su éxito la construcción de la economía nacional de cualquiera de los países sub-desarrollados. Responde la actual Ley de Reforma Agraria a la urgente e imperiosa transformación que requiere el país para ser puesto en marcha y salir de la crisis en que se encuentra sumergido? Como instrumento legal la respuesta es afirmativa. Su articulado establece los derechos y prevé las acciones que de ser ejercidos por los campesinos y la población en general y llevados a la práctica por el Estado a través de sus diferentes órganos, favorecerían la creación de una nueva estructura agraria y de las consiguientes relaciones de producción imprescindible para que sean liberadas las fuerzas productivas en el campo, hoy estancadas, coaccionadas y para impulsar el desarrollo económico general.

Al establecer el derecho de los campesinos a ser dotados de tierra en propiedad

preferentemente en los lugares donde trabajan o habitan y disponer que las tierras sean adjudicadas a grupos de campesinos, colectivamente, la Ley ha dispuesto el fraccionamiento de la gran propiedad latifundista y favorecido la concentración de la población campesina diseminada en centros poblados, en unidades de producción. Todos sabemos que los campesinos desde la colonia, salvo los que en el curso de la República se adentraron en tierras baldías, han venido trabajando o habitando en las grandes propiedades como "medianeros, arrendatarios, aparceros, ocupantes y que la aplastante mayoría de esas grandes propiedades no cumple con la función social, es decir, que no están explotadas eficientemente, no son trabajadas o dirigidas personalmente por sus dueños, que en ellas no se cumplen las disposiciones sobre conservación de recursos naturales ni son acatadas las normas jurídicas que regulan el trabajo asalariado. Con las tierras de esas grandes propiedades deberá ser dotada la mayor parte de la masa campesina hoy sin tierra y los propietarios que se nieguen a venderlas al Instituto Agrario Nacional, en consecuencia serán expropiados. Los grupos de campesinos dotados de tierra se integrarán en Centros Agrarios y de entre ellos mismos elegirán un Comité Administrativo, el que tendrá a su cargo la organización y dirección de la nueva Comunidad, la elaboración y discusión de los planes de cultivo, la gestión de los créditos, de la asistencia técnica, etc. De la creación e incremento de esos Centros Agrarios dependerá en definitiva la realización de la Reforma Agraria.

La Ley declara que los servicios de crédito, de asistencia técnica, etc. tienen carácter de interés público, es decir, que el Estado está obligado a organizarlos y prestarlos conforme a lo que en la misma Ley se establece en los respectivos Títulos y artículos. Ello, porque la sola dotación de tierra no determina la creación de una nueva estructura agraria. La población campesina dotada de tierra para ser efectivamente "incorporada al desarrollo económico, social y político de la Nación" -uno de los objetivos de la Ley- requiere del crédito para iniciar la producción y para incrementarla; de asistencia técnica para el mejor aprovechamiento de la tierra, la escogencia de los cultivos más apropiados a cada región y para hacer más productivo el trabajo y menos

duro el esfuerzo a realizar; de los servicios de almacenaje, mercadeo y precios mínimos que aseguren a los campesinos la colocación de sus productos en el mercado con remuneración efectiva para sus esfuerzos; de servicios asistenciales para la defensa de la salud de la comunidad; de los servicios culturales para el perfeccionamiento de la personalidad y una mayor garantía de convivencia democrática.

Al declarar esos servicios de interés público y establecer disposiciones pertinentes para su organización y aplicación, la Ley de Reforma Agraria previó solución a otro muy importante problema de la construcción de una economía nacional: la sincronización de la producción agropecuaria con la industrial y artesanal, del intercambio entre las ciudades y campos. La anarquía y el despilfarro provocados por la competencia y la especulación propias del sistema basado en el lucro individual podrán ser contrarrestados, en beneficio de los productores y consumidores, con la organización por el Estado de los servicios de mercadeo, de adquisición y distribución de suministros a los productores rurales y de cooperativas de producción, de venta de productos, de consumo, etc. "El Banco Agrícola y Pecuario -establece el Art. 130- debe recibir de los pequeños y medianos productores que así lo deseen, en consignación, en pignación o para ser aplicado su valor al pago de cuotas de amortización o interés de sus respectivos créditos con dicho Instituto, los productos agropecuarios provenientes de sus unidades de explotación incluidos en la nómina y en la lista de precios a que se refiere el artículo siguiente" y el 131 "La adquisición de los productos garantizados con precios mínimos se hará directamente de los productores, de sus asociaciones y cooperativas por intermedio del Banco Agrícola y Pecuario o del Organismo cuya creación se ha previsto en este Título".

Con base en esas disposiciones deberá ser creada -no tenemos información de que se esté creando- en todo el país una red de establecimientos que partiendo de las unidades de producción, asegure la distribución de los productos agropecuarios en los mercados urbanos y el suministro a los productores rurales de los artículos manufacturados. Con esta red el servicio de otorgamiento de créditos se simplificaría, se requere

riría menor volumen de circulante y se facilitaría en gran manera el financiamiento de la Reforma Agraria, ya que los beneficiarios de créditos en lugar de dinero en efectivo recibirían los artículos de consumo necesarios a su subsistencia y los requeridos para su producción (semillas, implementos de trabajo, abonos, etc.) En cada Centro Agrario un almacén, bodega, tienda, bulbería, como se le quiera llamar, cumpliría las funciones de Agencia del Banco para la entrega y recuperación de los créditos -el otorgamiento corresponde a otros organismos-, de comprador de los productos, de vendedor de los suministros, y mediante un simple sistema de "cuentas corrientes" cada campesino o cooperativa estaría en posibilidad de realizar sus operaciones en forma práctica y eficiente, sin tener que manipular moneda. Esa red de establecimientos, a más de asegurar el intercambio entre los productores del campo y los de las ciudades, propendería al abaratamiento del costo de la vida en general al quedar eliminados los intermediarios y especuladores que la encarecen (los honorables señores de "Quinta Crespo" no dejarán de esgrimir pesudos estudios económicos demostrando que un tal sistema es imperante y contrario a los intereses nacionales). Además, se fomentaría el ahorro en la población campesina y el mejoramiento gradual de sus condiciones de vida. Así, por millones de canales se incrementaría el ahorro nacional, la acumulación de capital nacional, y dejaría de escapar al exterior, a engrosar fortunas extranjeras, la riqueza que producen los obreros y campesinos.

La realización de la Reforma Agraria, el impulso al desarrollo industrial, la sincronización de ambas acciones es camino de base sólida y firme aunque aparezca largo y escarpado. Los planes espectaculares, de las grandes inversiones de capitales privados extranjeros enriquecen a los países de donde provienen y a donde son exportadas las utilidades; por el contrario, empobrecen al que las recibe, lo endeudan y le obstaculizan su desarrollo económico propio.

Las disposiciones de la Ley sobre el derecho de los campesinos a ser dotados de tierra, la organización de los Centros Agrarios, de los servicios, etc. rigen para todo el país. Es claro que la aplicación en la práctica de algunas de esas disposiciones varía

Ley vigente.

Pero los ciudadanos Senadores y Diputados reunidos en Congreso y no obstante el haber aprobado ya en sus respectivas tres discusiones el texto del Art. 16, resolvieron por inexcusable ligereza o inexperiencia modificarlo, aumentando de 100 a 150 y de 2.000 a 5.000 hectáreas las extensiones a que los ocupantes de baldíos podrían pretender se les adjudicara en propiedad. Por una parte los autores de la modificación se manifestaron así más benefactores de la gran propiedad que sus colegas de 1.936, contrariando el objetivo de la nueva Ley de hacer descansar la estructura agraria sobre la pequeña y mediana propiedad, y por la otra, crearon una prerrogativa incalificable a favor de ocupantes que, por haber violado la Ley de Tierras Baldías y Ejidos, estarán en posibilidad de que se les adjudicara en propiedad las mayores extensiones que habían usurpado, mientras los respetuosos de las Leyes, los que habían circunscrito su ocupación a los límites fijados por la Ley de Tierras Baldías, esos no podrían pretender se les adjudicaran esas mayores extensiones, ya que por no haberlas ocupado ilegalmente con anterioridad a un año de entrar en vigencia la Ley de Reforma Agraria, no tendrían la posibilidad de comprobar la requerida ocupación. Algunos, como argumento de excusa, podrán aducir que por ser escasos esos "respetuosos" pocos serán los que dejen de beneficiarse con la modificación, pero de ser esgrimido ese argumento, el gongo de inmoralidad implícito en la modificación quedaría más de bulto. Los burladores de leyes en nuestro país -en este caso los voraces latifundistas que corrieron sus cercas más allá de los límites legales- nunca soñaron en que serían recompensados tan espléndidamente.

Y, cómo los ciudadanos Diputados y Senadores fueron inducidos a aceptar la mentada modificación al Art. 16? En la Comisión de Reforma Agraria cursaron proposiciones de que la tradicional clasificación de tierras, aceptada en muchas legislaciones agrarias, en tierras de agricultura y tierras de ganadería, de primera y segunda clase, fuera sustituida por un sistema científico de clasificación, pero como los elementos aportados no estaban respaldados por experiencia concretas, se optó

según las condiciones especiales que prevalezcan en regiones o cultivos determinados. Es el caso, por ejemplo, de las zonas cafeteras y cacaoteras. La realización de la Reforma Agraria en esas zonas, por los diversos y complejos problemas que involucra, reclama una especial atención. Nos limitaremos a comentarios generales con el solo propósito de abrir, si podemos decirlo así, la discusión, seguros de que para ustedes, como técnicos del agro, les será de interés. Nos permitiremos también someter a consideración de ustedes dos soluciones:

Al comentar la incidencia de la explotación petrolera en la estructura agraria atrasada del país, sostuvimos que el deterioro progresivo que han venido acusando las explotaciones extensivas de café, cacao y hatos ganaderos tenía su origen en el hecho de que ya no podían seguir perviviendo las relaciones de producción semi-feudales -las que incluso en el siglo pasado representaron con respecto al sistema esclavista cierto avance expresado por aumento de la producción. La etapa de la mano de obra servil, fuente de renta de los grandes propietarios de tierra, ha llegado a su término.

Todos sabemos que en la zona centro-costera -1/5 de la extensión territorial del país- habitan más de las 4/5 partes de su población total y que en esa zona han predominado el café y el cacao como cultivos estables. En el Atlas Agrícola de Venezuela, recientemente editado por el M.A.C. en los mapas 51 y 62, se puede apreciar la ubicación y extensión de esas zonas. Hasta el advenimiento del petróleo el café y el cacao cubrieron nuestros pagos en el exterior como productos de exportación. Posteriormente han continuado suministrándonos divisas y en torno a ellos ha girado la bonanza o malestar de amplios sectores de la población. Mala cosecha o baja de precios en el mercado internacional ha significado aumento de la miseria de los campesinos y malestar general en ciudades y pueblos del interior. La explotación petrolera agravó esa situación. El abandono de las haciendas por sus propietarios y, por consiguiente, la disminución de gastos y de inversiones, han hecho más precaria aún las condiciones de vida de las familias que trabajan o habitan en las zonas cafeteras o cacaoteras. La cantidad y calidad de la producción ha disminuido, lo que ha afectado nuestra Balanza de Pagos por la menor

cantidad de divisas propias con que hemos contado.

Qué medidas han sido tomadas para contrarrestar esa situación? Cerrando los ojos ante las verdaderas causas del deterioro de esas explotaciones gobiernos complacientes han decretado planes de protección a la "agricultura" -léase a los grandes propietarios-, creado subsidios al café y al cacao, etc., presionados tanto por sectores de propietarios como de comerciantes exportadores de esos frutos, quienes así logran todauía percibir pingües entradas. Como los cuantiosos egresos que el Estado ha hecho no han representado ningún beneficio para la población campesina ni para el mejoramiento en cantidad y calidad de esos productos, individuos aislados se han pronunciado alegremente por la erradicación total de esas plantaciones, arguyendo las plagas que diezman las de cacao o la erosión que causan las de café. Discusiones y golillas éstas a las que debe poner término la Reforma Agraria, pues su realización obliga a enfocar el problema en forma muy definida en cuanto a la población que trabaja o habita en las zonas cafeteras y cacaoteras; en cuanto al incremento de esos cultivos como productos de exportación y de amplio consumo interno y en cuanto al aprovechamiento que como riqueza acumulada representan esas plantaciones para la economía nacional en general y para la de las respectivas zonas en particular.

Para precisar la forma de realización de la Reforma Agraria en esas zonas, concretaremos las disposiciones de la Ley que deben ser aplicadas y las características que condicionan esa aplicación. Así tendremos:

- 1°) Los campesinos que trabajan o habitan en las haciendas de café y cacao como "medianeros", arrendatarios, aparceros, o simples ocupantes, tienen derecho a ser dotados en grupos con esas tierras. La aplastante mayoría de esas haciendas no cumplen con la función social de la propiedad, por tanto, la excepción de inexpropiabilidad sobre fundos de más de 150 hectáreas no podrá ser invocada y sus dueños obligados a venderlas al Instituto Agrario Nacional.*
- 2°) La diversidad de edades o robustez de las matas de café o cacao, la abundancia o escasez de sombra, lo accidentado de los terrenos, etc. presenta dificultades para que se lleve a cabo un fraccionamiento equitativo de esas haciendas entre*

los componentes de los grupos de campesinos a dotar, tanto más si se toma en cuenta que gran parte de ellos son "medianeros", es decir, propietarios de matas .

- 3°) Por más equitativa que se logre realizar la parcelación, dado el deterioro en que se encuentran las plantaciones, el número de matas que a cada componente del grupo corresponda, no sería suficiente para con su producción asegurar la manutención del dotado y de su familia.
- 4°) Tanto el café como el cacao, pero más el café, requieren después de ser cogida la cosecha, de determinada elaboración o beneficio para que el producto pueda ser llevado al mercado, elaboración o beneficio que no podría ser realizado individualmente por cada parcelero en su parcela, debido a lo costoso de la respectiva instalación.

Además, el proyecto de realización debe:

- a) garantizar la incorporación de esa gran masa campesina "al desarrollo económico, social y político de la Nación", uno de los objetivos de la Ley;
- b) garantizar el incremento de la cantidad y calidad de la producción de café y de cacao con la finalidad de abastecer el creciente consumo interno y, como frutos de exportación, de disponer cada vez de mayor cantidad de divisas con las cuales pagar importaciones, tanto más necesarias esas divisas cuanto que por ser el petróleo un recurso natural no renovable, sus yacimientos se extinguirán en plazo no remoto;
- c) garantizar la conservación y ampliación del capital acumulado que representan esas plantaciones, así como la activización de la economía de cada zona en particular.

En consecuencia, y dentro de los marcos de la Ley de Reforma Agraria y conforme a sus objetivos, cabe discutir dos proposiciones de solución, las que sometemos a consideración de ustedes:

Primera: Organizar en cada hacienda al grupo de campesinos con derecho a la dotación en una cooperativa de producción, a la que sería adjudicada la tierra en

propiedad gratuitamente. Las matas de café o cacao, según el caso, les serían entregadas en venta, previo avalúo y para ser pagadas en los plazos que la Ley establece para las parcelas. La cooperativa asumiría la dirección y organización de la producción, de las labores de mejoramiento de las plantaciones, de elaboración o beneficio del producto y su venta en el mercado. Las cooperativas de una misma región podrían llegar a acuerdo para costear en común la construcción de las instalaciones en las que serían elaborados o beneficiados los productos de todas ellas.

Queda entendido que el grupo de campesinos, como sujeto de la Reforma Agraria, gozaría de todas las disposiciones de la Ley: organización del Centro Agrario y construcción del centro poblado, servicios de crédito, asistenciales, etc. Segunda: ~~proposición~~, por la que nos inclinamos debido a que se adapta más a las características actuales de la población de esas zonas, al estado en que se encuentran las plantaciones, a los problemas de la elaboración o beneficio y mercadeo de esos productos:

El grupo campesino sería organizado en Centro Agrario, con todas las instalaciones, servicios, etc. que establece la Ley. El grupo campesino y por tanto, el Centro Agrario, podría estar integrado con campesinos que trabajen o habiten en una o más haciendas colindantes;

Cada campesino sería dotado de su parcela, la que comprendería dos porciones de terreno que podrían encontrarse dentro de unos mismos linderos o separadas, según la extensión de la tierra a distribuir o la ubicación de las matas (de café o cacao): en una porción de su parcela estarían incluidas las matas que le corresponda; en la otra, de sarrollaría otros cultivos y otras actividades agropecuarias, preferentemente organizada en forma de granja mixta;

A cada campesino le sería adquirida su producción de café o cacao, en concha o en baba, por el Banco Agrícola y Pecuario o por el Organismo que al efecto fuere creado y le sería pagado un precio equivalente al que rija en el mercado para el producto e-

laborado, es decir, deducida la merma y los gastos de elaboración o beneficio y de transporte;

Para la recepción de esos frutos en concha o baba, el Banco o el Organismo establecería oficinas en lugares equidistantes, aprovechando para ello las más modernas instalaciones existentes en la región o construyendo nuevas. Esas oficinas, como dependencias del Banco o del organismo, se encargarían de todo lo relacionado a la elaboración o beneficio del producto, su mejor manipuleo y presentación en el mercado. Esas oficinas podrían ser integradas en la red de establecimientos a que nos referimos anteriormente;

Cada miembro del grupo, teniendo asegurada su subsistencia y la de su familia con la producción de su granja mixta, estaría en posibilidad de dedicar especial atención al cuidado de sus matas de café o cacao, tanto más cuanto que por una mayor producción y mejor calidad percibiría mayores entradas. La lucha contra las plagas, por la aplicación de los más modernos métodos de cultivo y selección, tendrían una efectiva aplicación y las erogaciones del Estado en esos servicios, un mejor y mayor aprovechamiento y se justificarían porque redundarían en beneficio de los intereses generales.

--- --

Las relaciones de producción, como es fácil deducirlo, sufrirían una profunda transformación, posible ahora con la realización de la Reforma Agraria. Y es esta transformación lo que permitirá que podamos conservar e incrementar en nuestro país los cultivos de café y de cacao hoy en progresivo deterioro, ya que por sus propias características son incompatibles con la mano de obra asalariada, organizada y protegida por leyes especiales. En la determinación de los precios de estos productos en el mercado internacional, dada la superproducción existente, influye en gran parte el empleo de mano de obra servil que subsiste aún en los países y colonias productores de café o cacao. El cambio diferencial ha permitido que estos productos hayan podido concurrir al mercado internacional, pero nadie podrá negar que no obstante ese subsidio y las erogaciones cuantiosas realizadas por el Estado en los planes de ayuda a la "agricultura", etc. en el lapso 1.937-50 la producción de café descendió de 74 millones de kilos a 50 millones y

la producción media por hectárea de 219 a 179 kilos. La del cacao a su vez descendió respectivamente de 24 millones a 17 millones de kilos y de 308 a 245 kilos. Estas cifras de por sí elo uentes, no expresan sin embargo la verdadera realidad.

Es de advertir que la segunda proposición ~~no~~ ^{no} excluye la incorporación a la nueva estructura de los pequeños y medianos propietarios de fundos, es decir, propietarios de tierra y matas, pues los propietarios de matas de hecho están incluidos. Los Censos de 1.950 acusan que en las zonas cafeteras existían 60.000 unidades de producción y en las de cacao, 10.700 con áreas totales respectivamente de 339.000 y 70.000 hectáreas, sin especificar el grado de concentración de la propiedad, como tampoco cual es el número de propietarios de tierra y matas, de solamente la tierra y de los de matas sin tierra, da tos que ayudarían mucho a la mejor comprensión del problema. Pero éstos y otros as - pectos ~~podrían~~ ser objeto de investigaciones posteriores. Como dijimos, nos limitamos a presentar a ustedes un esquema y de ninguna manera un trabajo completo.

El jueves pasado, de las intervenciones que siguieron a la interesante conferen - cia del Dr. Giménez Landínez, quedó de manifiesto la preocupación latente en los técni - cos del agro por precisar cuál deberá ser su participación en la realización de la Refor - ma Agraria y en que forma esa realización influirá en el mejoramiento de sus condiciones y medios de vida. Sin proponernos responder a las preguntas que fueron formuladas y ra - tificando lo que hemos afirmado anteriormente sobre la decisiva proyección que en la formación de la estructura agraria del país tendrá la aplicación de las disposiciones so - bre Centros Agrarios, podemos declarar que en la organización de esos Centros los téc - nicos y expertos del agro dispondrán de la mejor oportunidad para desarrollar las más variadas y diversas iniciativas creadoras. En la última Convención de los Peritos Agríco - las, reunida en Acarigua el año pasado, tuvimos ocasión de referirnos al deber de los técnicos con respecto a la reforma agraria. Como ciudadanos, al recibir en nuestras es - cuelas, liceos y universidades los conocimientos que en su conjunto integran una profe - sión, contraemos el deber sagrado de poner esos conocimientos al servicio de la Nación, cada cual en la actividad específica escogida. Pues bien, para llevar adelante la gran ta

rea de construir la nueva estructura agraria, Venezuela espera de todos cuantos recibimos el beneficio de una profesión, su mayor y decidido concurso. En los millares de Centros Agrarios que deberán ser creados y puestos en marcha -a grosso modo unos 3.500- se abren a los técnicos del agro en sus diversas especialidades, así como a los médicos, maestros, ingenieros, economistas, sociólogos, etc. las más estupendas oportunidades para realizar una obra perdurable, aunque de inmediato poco halagadora la remuneración y escaso el confort de vida que el Estado está en capacidad de ofrecer. La verdad es que la historia nos ha puesto a prueba y no debemos vacilar, sino aceptar el reto con la convicción de que saldremos airoso. Las leyes, por muy fielmente que expresen la realidad de un momento dado, siempre estarán expuestas a convertirse en alimento de polillas si no cuentan, para su aplicación, con el entusiasmo y decisión de la gran mayoría de ciudadanos. Y la Ley de Reforma Agraria es una Ley nacional en sentido preciso y obligante porque de su profunda y consecuente aplicación depende el porvenir de nuestra Nación.

Conferencia dictada en la Asociación de

(1): Cita tomada de "Economía y Finanzas de Venezuela", Ramón Veloz.